

**ILUSIONES Y DILEMAS
LA DEMOCRACIA EN
CENTROAMÉRICA
FLACSO . Biblioteca**

Klaus D. Tangermann
Compilador

FLACSO . Biblioteca

**ILUSIONES Y DILEMAS
LA DEMOCRACIA EN
CENTROAMÉRICA**



FLACSO

321.4

I-38-i Ilusiones y dilemas: la democracia en Centroamérica /
comp. Klaus D. Tangermann.-- 1.ed. -- San José:
FLACSO - Programa Costa Rica, 1995.
356 p.
ISBN 9977-68-070-1

1. Democracia - América Central. 2. Mujeres - Actividad política. I. Tangermann, Klaus. II. Título.

Ilustración de la portada:
Versión primera. Serie La violencia.
Lola Fernández. Costa Rica. 1959
Oleo sobre tela. 134.5 x 94.5 cm.
Colección de la artista.

Editora:
Vilma Herrera

Procesamiento del texto:
Mercedes Flores Rojas

- 7209

© Programa Costa Rica - FLACSO

Primera edición: Noviembre 1995
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO
Programa Costa Rica. Apartado 11747. San José, Costa Rica

INDICE

INTRODUCCIÓN	7
LA DEMOCRACIA CENTROAMERICANA EN LA DISCUSIÓN <i>Klaus-Dieter Tangermann</i>	15
AUTORITARISMO Y DEMOCRACIA EN CENTROAMÉRICA: LA LARGA DURACIÓN-SIGLOS XIX Y XX- <i>Victor H. Acuña Ortega</i>	63
CONSOLIDAR LA DEMOCRACIA EN CENTROAMÉRICA: UNA ARDUA TAREA <i>Manuel Rojas Bolaños</i>	99
MUJER Y POLÍTICA EN CENTROAMÉRICA: EL CAMINO DE LA DEMOCRATIZACIÓN <i>Cristina Eguizábal</i> <i>Juany Guzmán León</i>	157
CONCERTACIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN REGIONAL: ¿UNA NUEVA FORMA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL? <i>Rolando Rivera</i>	207

UNA DEMOCRATIZACION PECULIAR: NICARAGUA EN LOS 80	263
<i>Luis H. Serra Vásquez</i>	
PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES POPULARES EN NICARAGUA: CAMBIOS ACTUALES -1990-1994-	313
<i>Ivana Ríos Valdés</i>	
ACERCA DE LOS AUTORES	353
INDICE	355

FLACSO - Biblioteca

PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES POPULARES EN NICARAGUA: CAMBIOS ACTUALES -1990-1994-

Ivana Ríos Valdés

INTRODUCCION

La revolución sandinista planteó un modelo político original, que como señala Luis Serra en su análisis de la década de los 80, "trataba de combinar elementos de los modelos liberal y socialista",¹ paradigma que permitió la incorporación de elementos participativos que los sectores populares nunca habían alcanzado en la historia de Nicaragua.

Sin embargo, lo incipiente de este modelo, sumado a los problemas estructurales del país, no trajo mayores avances en materia política y social. Por el contrario, la sociedad nicaragüense en el periodo que a continuación analizaremos se sumió en una profunda y seria crisis económica y política que debilitó aún más los logros que durante los 80 se habían obtenido.

Los cambios en la participación de los sectores y organizaciones populares, serán, a partir de los 90, el eje conductor de nuestro estudio.

Es por ello que iniciamos este trabajo con el análisis del periodo de transición. La transferencia de poderes significó el

1. Serra, Luis: *Una democratización peculiar: Nicaragua en los 80*. Publicado en este libro.

preámbulo para el inicio del nuevo gobierno y para los futuros cambios que se operaron en el país. En una coyuntura particularmente convulsionada, el Protocolo de Transición sentó las pautas para una transición pacífica.

El capítulo continúa con tres secciones en las que se resumen los principales cambios económicos y políticos que se operan en la sociedad nicaragüense. Sigue una sección donde se analizan las implicaciones sociales de las políticas para los sectores populares y el impacto de ellas en la estabilización para las organizaciones populares. Después se examinan los cambios que en términos políticos experimentan las organizaciones populares. El capítulo finaliza con una breve conclusión sobre el análisis.

LA TRANSICIÓN

En las elecciones efectuadas el 25 de febrero de 1990, se produjo el triunfo de la Unión Nacional Opositora (UNO)—alianza de catorce partidos— y la derrota del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).²

Después de estas elecciones, se realizó un proceso de negociaciones que culminó el 27 de marzo de 1990 con la firma del llamado "Protocolo de Procedimiento de la Transferencia del Poder Ejecutivo de la República de Nicaragua", mejor conocido como "Protocolo de Transición".³ Fue el comienzo de una peculiar fórmula de consenso entre el nuevo poder ejecutivo y el Frente Sandinista, firmado por el futuro Ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo, y por los comandantes Humberto Ortega —Jefe del Ejército Popular Sandinista— y Jaime Wheelock, en representación del FSLN.

2. Véase Cortés Domínguez, Guillermo: *La lucha por el poder*, Managua: Vanguardia, 1990.

3. *Barricada*, 23 de abril de 1990, Managua, Nicaragua.

Las negociaciones se iniciaron tres días después de concluido el proceso electoral, duraron dos meses y finalizaron con la toma de posesión de la Presidenta Chamorro.

En el acápite del Protocolo titulado "Bases para la Transferencia", fueron considerados y aprobados cuatro aspectos fundamentales: seguridad, conciliación, estado de derecho y gestión económica internacional; aspectos con los cuales se aseguraría el traspaso de uno a otro gobierno, y que se resumen en los siguientes elementos:

1. Subordinación de la fuerzas de defensa y de orden público al poder civil de la Presidencia y el no desempeño de sus miembros en cargos directivos de ningún partido político.
2. Integridad e independencia de los poderes del Estado, respetando la Constitución y las leyes.
3. Necesidad de proporcionar tranquilidad y seguridad jurídica a las familias nicaragüenses que habían sido beneficiadas con propiedades urbanas y rurales —en virtud de asignaciones del Estado antes del 25 de febrero de 1990— armonizándolas con los legítimos derechos que pudieran tener los nicaragüenses afectados en sus bienes, para lo cual se procedería conforme a la ley. Se establecerían formas de compensación adecuada para quienes pudieran resultar perjudicados.
4. Garantía de estabilidad laboral para funcionarios y empleados de gobierno sobre la base de su eficiencia, honestidad administrativa y años de servicio.
5. Acuerdo para aunar esfuerzos en pro de la obtención de recursos internacionales durante la etapa de transición, para beneficiar la estabilidad y el crecimiento de la economía.

En la práctica el Protocolo sentó las bases para una transición pacífica del país, aún con fuerte presencia militar de los irregulares en el campo. En el transcurso de su ejecución, se

evidenciaron contradictorias interpretaciones que llevaron al país a grandes tensiones políticas y económicas.

En el seno de la UNO se evidenciaron tempranamente fuertes contradicciones, pese a que había alcanzado el 54.8% del electorado. Su frágil unidad multipartidista se manifestó a la hora del reparto de las cuotas de poder. En esta lucha por el control del gobierno,⁴ las más evidentes y frontales contradicciones se dieron entre la Presidenta Chamorro y el Vicepresidente Virgilio Godoy, cuando éste no pudo ubicar en el gabinete a miembros de algunos partidos de la coalición que le eran afines. Esto causó tensiones desde sus comienzos en los cambios políticos y económicos que, dentro de la alianza electoral, diferentes partidos venían proponiendo.

Los que tomaron el control del poder, es decir, la Presidenta Chamorro y el Ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo, se ubicaron en el ala más moderada de la UNO. Impulsaron una política económica conservadora, determinada en gran medida por las instituciones financieras internacionales. Sus políticas resultaron en una drástica reducción del gasto público, contracción en el empleo estatal, redefinición de las funciones del Estado y un profundo programa de privatización. Para lograr todo eso hacía falta conseguir el respaldo del mayor partido, los sandinistas, lo cual, en términos políticos, significó el entendimiento con el FSLN, lo que garantizó estabilidad en razón del respaldo social que este partido ostentaba.

Para el impulso de su programa, el nuevo gobierno contaba con tecnócratas vinculados al sector más dinámico de la empresa privada, que, en su mayoría, no habían tenido participación política anteriormente. Actualmente, siguen ubicados en los centros de decisión político-administrativo, ministerios,

4. La evidente pugna e inconformidad se denota cuando el Vice-presidente de la República, Virgilio Godoy señalaba: "solo he recibido hasta ahora un vehículo y un tanque lleno de combustible. En estos meses mi vehículo ha hecho más de seis mil kilómetros... creo que con una ración de combustible hubiese podido llegar muy lejos". *El Semanario*, No1, 6 de Septiembre de 1990, p.12

empresas estatales y organismos donde se deciden las políticas económicas del Estado.

Por su parte, el FSLN, como segunda fuerza demostrada en la contienda electoral, al obtener el 40.8 por ciento de los votos, continuó siendo el partido más fuerte del país. En el momento de la pérdida electoral también era el partido mejor organizado, pero débil desde el punto de vista económico.⁵ Contaba con un fuerte arraigo en la población y con hegemonía indiscutible entre la mayoría de las organizaciones populares movilizables.

En el Protocolo de Transición el FSLN cedió respecto a:

1. los cargos de dirección en el partido de los militantes ubicados en las fuerzas armadas, así como en la estructura de los mandos del ejército y policía;
2. la revisión de los casos de quienes habían sido afectados por confiscaciones improcedentes en los años anteriores.

Lo obtenido con los Acuerdos de Transición se vio seriamente amenazado por las contradicciones surgidas en el interior de la UNO. Esto obligó al FSLN a redefinir su estrategia frente al gobierno y el resto de los partidos; al mismo tiempo, obligó a la Presidenta Chamorro a redefinir la suya respecto a sus ex-aliados, lo cual generó un nuevo escenario de negociación política.

En definitiva, la solución que encontraron ambas fuerzas - la que perdió su posición dominante y la que buscaba construir y afianzar la suya- fue instaurar un proceso de transacción política y pacífica. Para el gobierno, ésta era la forma de dar viabilidad política a su política económica, el eje fundamental de su proyecto. Para la dirección del FSLN, era la forma de preservar posiciones y cuotas de poder en lo económico y lo político.

5. Antes de la transferencia de poder, la Asamblea Nacional, con mayoría sandinista, promulgó diferentes leyes que otorgaban a los miembros y militantes del FSLN propiedades no solo de inmuebles que hasta ese momento se suponían estatales

A las organizaciones populares y a los sindicatos sandinistas, la situación no se les planteó precisamente en este marco de transacciones, y éstos se constituyeron en los principales opositores de las políticas económicas del nuevo gobierno.

Por otra parte, los sindicatos no sandinistas apoyaron al gobierno en sus primeros conflictos con los sindicatos sandinistas, posición que más tarde fue modificada cuando el gobierno comenzó a impulsar y profundizar las políticas de ajuste económico. Este proceso generó dos momentos importantes, surgidos de las confrontaciones entre las organizaciones populares y el gobierno.

Su primera expresión fueron las dos huelgas nacionales realizadas en 1990. La primera de estas huelgas, realizada entre el 11 y 16 de mayo, fue iniciada por los empleados del sector público, agrupados en la Unión Nacional de Empleados (UNE) con demandas de ajuste salarial y contra la suspensión de la Ley de Servicio Civil.⁶ Concluyó con un acuerdo entre el gobierno y el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) y fue valorado como un triunfo importante por los sindicatos.

La segunda huelga se realizó del 27 de junio al 12 de julio y fue impulsada por dos sectores laborales: por un lado, los trabajadores de la industria textil-vestuario y de la construcción—fue una huelga escalonada en demanda de financiamiento para su respectiva reactivación—; por otro lado, los trabajadores agrícolas que se manifestaron en contra de la propuesta de arrendar tierras algodoneras de las empresas estatales a sus viejos dueños.

Este movimiento huelguístico fue en aumento, incorporando a diferentes sectores laborales del área productiva. También lo apoyaron los trabajadores del sector público, aprovechando el incumplimiento del gobierno de los acuerdos firmados durante la huelga de mayo. La capital nicaragüense, como en los días insurreccionales del 79, quedó paralizada por las barricadas. El gobierno llegó a un acuerdo en el que reconoció once de

6. Ley que garantizaba la estabilidad laboral de los trabajadores.

las dieciocho demandas del movimiento, que aglutinó a los diferentes sectores del FNT.

En términos políticos, el acuerdo fue considerado por los líderes como el reconocimiento a los derechos de los sindicatos, obviamente en peligro por la naturaleza social del nuevo gobierno. Así lo reconocieron sus principales dirigentes: "Lo más importante es que, conocida la fuerza y madurez del movimiento sindical, debe establecerse un nuevo tipo de relación entre el gobierno y los trabajadores."

Posterior a este primer momento de huelgas y confrontaciones, se pasó a una fase de negociación, la cual se conoció, desde entonces, como la Concertación Económica y Social. Esta Concertación se planteó en dos etapas. La primera se realizó entre septiembre y octubre de 1990. Entre los acuerdos más importantes estuvieron: reconocer la necesidad de reducir el déficit fiscal, vía la racionalización de los gastos y el mejoramiento en la recaudación de los ingresos.

La segunda etapa se efectuó entre julio y agosto de 1991. Aquí se consideró como eje principal el tema de la propiedad. Los sindicatos aceptaron la privatización de las empresas estatales, en tanto el gobierno se comprometió a garantizar el 25% de participación de los trabajadores, en modalidades que se acordarían posteriormente.⁷

A partir de la Concertación, se empezó a gestar una especie de "co-gobierno" entre el FSLN y el gobierno, que no se expresa en responsabilidades compartidas, sino en coincidencias a las que se llegó a través de transacciones. En éstas, el gobierno garantizó la implementación del plan económico y de las reformas institucionales.

El FSLN enfatizó en el respeto a la redistribución de la propiedad que se produjo a través de leyes promulgadas por el gobierno sandinista durante el proceso de transición; en la

7. Véase Acuerdos de la II Fase de la Concertación Económica y Social, 13 de Agosto de 1991, en el Área Propiedad de los Trabajadores: Una Nueva Forma de Propiedad Social en Nicaragua, Cuadernos de CIPRES, número 10, Diciembre de 1991, anexo número 3, Managua, Nicaragua.

garantía para los trabajadores durante la privatización de los activos estatales y en la no devolución de bienes a los antiguos somocistas confiscados vía decretos promulgados a inicios de la revolución por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Todo, a cambio de la mediatización de las luchas populares, para garantizar supuestamente la estabilidad nacional.

LAS NUEVAS POLÍTICAS

Las políticas del gobierno de Violeta Chamorro, giran alrededor de tres ejes centrales: a. paz y reconciliación nacional; b. estabilización y ajuste estructural; c. democratización: actuaciones de los partidos.

En la primera (paz y reconciliación) se ha avanzado notablemente, mientras que en la segunda y tercera (estabilización y democratización) aún están por verse los resultados.

a. Paz y reconciliación nacional

En junio del 90, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) —encargados de la supervisión del proceso de paz y reconciliación— informaron de la desmovilización de alrededor de veinte mil armados.

El nuevo gobierno se comprometió a proporcionar a estos desmovilizados, programas de ayuda para su rehabilitación y reinserción en la sociedad, lo que formó parte de los acuerdos de desmovilización. Sin embargo, la desmovilización no fue tan regular por la falta de cumplimiento del gobierno.

En 1991, muchos de los desmovilizados contras se armaron nuevamente y fueron conocidos después como *recontras*. También, otro grupo de ex miembros del ejército y de la policía

sandinista, desmovilizados, se rearmaron por su cuenta y pasaron a ser conocidos como *recompas*. A finales de ese año apareció un grupo de ex-militantes sandinistas, autodenominados Fuerzas Punitivas de Izquierda (FPI).

A comienzos del 92, el gobierno logró los primeros acuerdos con los *recontras* y *recompas* a través de una comisión tripartita con representantes de la OEA, de la Iglesia Católica y del gobierno. Los acuerdos tampoco fueron cumplidos. Desde entonces, y a pesar del proceso de desmovilización oficial, persisten pequeños grupos armados como expresión de inconformidad por el incumplimiento gubernamental.

El problema de la guerra continúa bajo otras expresiones: el aumento de la delincuencia y violencia, atracos, secuestros, asesinatos contra dirigentes de organizaciones sandinistas y no sandinistas. La vinculación de este tipo de acciones con motivos políticos, es también notoria. Como es tradicional, estas acciones se manifiestan con mayor fuerza en el campo.

b. Estabilización y ajuste

Al asumir el poder, la Presidenta Chamorro impulsó dos programas de estabilización, acompañados de un programa de políticas de ajuste estructural.

El primer programa de estabilización se planteó en mayo de 1990. La ejecución de este programa llevó al gobierno a suspender la Ley de Servicio Civil, lo que le ofreció un margen legal para el despido de miles de trabajadores del sector público. El segundo programa, se impulsó en marzo de 1991.

Estas políticas buscan la transformación estructural de la economía, orientadas hacia la empresa privada y a un sistema de mercados libres: "La política de transformación estructural busca devolver a la empresa privada el papel protagónico que debe desempeñar en la producción de bienes y servicios domésticos".⁸

8. Para más detalles véase el Documento Presentado por el

En este ámbito se sientan las bases para la destrucción del Estado anterior y la construcción de un aparato estatal que responda a la concepción de las políticas neoliberales y a las presiones de los organismos financieros internacionales. Se esperaba públicamente que una vez configurado este modelo, la economía emprendería el camino de la reactivación y el crecimiento.

Sin embargo, la realidad fue otra. Ni siquiera cinco años después vino el despegue soñado y al cabo de tres meses, se suscitaron las huelgas nacionales que he mencionado; lo que influyó en la decisión del gobierno de retirar el primer programa de estabilización. El segundo programa se constituyó en la base sobre la cual se erigió la política económica que aún continúa ejecutándose.

Privatización

Durante el gobierno sandinista (1979-1990) el proyecto de desarrollo fue estructurado con base en las 351 empresas estatales (conocidas como Área Propiedad del Pueblo, APP) que aglutinaba 77,824 trabajadores, un 9% del empleo, generador de aproximadamente el 30% del Producto Interno Bruto. Muchas de estas empresas fueron establecidas y desarrolladas durante el gobierno sandinista, a partir del proceso de confiscaciones que se dio en esa década.

El nuevo gobierno promovió desde 1990, la devolución de las propiedades que se consideraron injustamente confiscadas por los sandinistas y propició la privatización de estas empresas y propiedades. Las propiedades de Somoza, no fueron sujetas de devolución, y en el caso de las tierras ocupadas por cooperativas, de ex dueños no somocistas, se sugirió indemnizarlos.

Gobierno de Nicaragua ante la Conferencia de Donantes en Roma, Junio de 1990, y el Informe anual 1990 del Banco Central de Nicaragua.

Este proceso ha generado un mayor conflicto en la sociedad nicaragüense. En la segunda fase de la Concertación (1991), después de una larga negociación, los trabajadores representados por sus sindicatos lograron conseguir el 25% de las propiedades estatales sujetas a la privatización. Al iniciarse la privatización (1992), los trabajadores de base y los dirigentes de los sindicatos de la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) y de la Central Sandinista de Trabajadores (CST), organizaciones de afiliación sandinista, decidieron oponerse a la privatización y a las devoluciones. Esta posición no sólo fue replanteada posteriormente, sino también aceptada y negociada por los dirigentes. De esta forma, se creó una situación muy compleja y delicada, sobre todo para los trabajadores de base, ya que éstos no participaron en las negociaciones ni les fue planteado el asunto en un proceso de consulta y discusión.

En estas condiciones surgió la llamada Area Propiedad de los Trabajadores (APT), que agrupa empresas del sector industrial y agropecuario. Las empresas de APT fueron constituidas como sociedades anónimas, en las que los trabajadores son los principales socios. En el campo se formaron 39 empresas con 146 fincas que suman 170,435 manzanas⁹ de tierra y tienen 1,490 socios. En la ciudad el consorcio se produjo en 58 empresas, en 35 de las cuales hay un ciento por ciento de participación —con 2,670 trabajadores— y entre el 20 y 80% en las restantes 23 empresas.

Los trabajadores integrados en el APT, lograron su cuota de coparticipación en el proceso de democratización económica, pero implicó la reorientación de sus intereses y actividades como clase trabajadora. Inevitablemente, esto les produjo la pérdida de la capacidad de influencia y de movilización, en un ámbito de mucha inestabilidad política y económica.

La privatización supuso para los trabajadores del campo el surgimiento de un nuevo sector de trabajadores-socios, lo que crea una disyuntiva en términos organizativos y políticos para las organizaciones populares. Sostener las empresas significa

9. Una manzana equivale a 0.7 hectáreas.

la capacidad de impulsar su desarrollo y alianzas económicas, en condiciones no muy ventajosas para el sector. Lucío Jiménez, secretario general de la CST, señaló lo siguiente: "Estamos conscientes de que con una propuesta global, al igual que en toda negociación, tenés que hacer concesiones... al final irremediamente hubo que hacerlas. En Managua fue muy poco el respaldo político, pero el respaldo del sandinismo en las regiones fue muy grande."¹⁰

El miembro de la dirección del APT, José Adán Rivera, planteó que la crisis creada por las restricciones de las habilitaciones financieras, solamente permitían emplear de forma permanente al 75% de los 18,437 socios del APT.¹¹ Evidentemente, el APT aún no logra integrar como corporación empresarial a todos los trabajadores del campo y la ciudad. Los esfuerzos que reclama la organización empresarial les obliga a desatender al resto de los trabajadores.

FLACSO - Biblioteca

ACTUACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

En Nicaragua existe un clima libre para el desarrollo de los partidos políticos. Prácticamente, la mayor parte se legalizó sólo a partir de la campaña electoral de 1989-90, por la vía de los acuerdos políticos de agosto de 1989, y en su mayoría cuentan con muy poco o casi ningún arraigo ni clientela orgánica en la sociedad civil. Con ese tipo de partidos se constituyó la Unión Nacional Opositora (UNO). Logrando así surgir como una esperanza para la sociedad nicaragüense, que fuera capaz de terminar con la guerra y obtener una mayor estabilidad económica.

10. Véase "La Cohesión sindical fue clave para negociar", Lucío Jiménez, secretario general de la CST, *Barricada* 1 de Febrero de 1993.

11. Véase "Trabajadores-empresarios: un reto y una esperanza". *Barricada* 9 de Febrero de 1993.

Cinco años más tarde, en 1995, ya hay 26 partidos políticos legalmente constituidos. De ellos, cuatro partidos se constituyeron después de los 90, de acuerdo con la Ley Electoral; otros—incluido el FSLN—obtuvieron su legalidad por su simple existencia al producirse el triunfo revolucionario—no tuvieron que cumplir los requisitos de esta ley— y a dos más les fue otorgada la personalidad jurídica por una reforma ad hoc de la Asamblea Nacional.

A excepción del FSLN, la mayoría de los partidos políticos no tienen bases sociales desarrolladas ni organizadas y su capacidad de influencia es mínima. Una encuesta de opinión realizada en 1995, reveló que la mayoría de los partidos son desconocidos para la población. Los más conocidos son el FSLN, la UNO y el Partido Liberal Independiente, con porcentajes mayores al 19%, y con porcentajes entre el 4 al 10% salieron los partidos Conservador Demócrata, Social Demócrata, Social Cristiano y Liberal Constitucionalista (PLC). Aparece también una gama de partidos políticos sobre los cuales el nivel de conocimiento de su existencia es igual o menor al 1%.¹²

En esta encuesta no se tomó en cuenta los cambios producidos en 1994, por ejemplo, la fusión del Partido Conservador Demócrata con el Partido Social Conservador en uno solo: el Partido Conservador de Nicaragua; ni la unión del Partido Popular Social Cristiano con el Partido de Confianza Nacional, que produjo el surgimiento de la Unión Demócrata Cristiana (UDC).

Sin embargo, hay que destacar que el resultado de la encuesta relacionada con las figuras ligadas a estos partidos, ofrece resultados distintos; siendo los que más recogen intenciones de voto: Arnoldo Alemán, del PLC, con un 22.8%; Daniel Ortega, del FSLN, con un 15.8%; Sergio Ramírez, del Movimiento de Renovación Sandinista, con un 5.1%; y Violeta Chamorro, sin partido conocido, con un 4.1%, lo cual indica la importancia

12. Véase, Resumen Ejecutivo de la Investigación, La Gobernabilidad y el Acuerdo Nacional en Nicaragua, Investigación sobre la Opinión Pública, Enero 1995, Instituto de Estudios Nicaragüenses (IEN), Managua, Nicaragua.

del liderazgo en la percepción que del sistema político tiene la población nicaragüense.

El FSLN, experimentó cambios profundos. De partido gobernante pasó a constituirse en el partido de oposición más fuerte, con 39 escaños en la Asamblea Nacional de un total de 92 y aproximadamente 300,000 miembros inscritos. Para los niveles latinoamericanos es, probablemente, el único partido opositor con esta membrecía.

En el 90 el FSLN inició debates acerca de las causas que originaron la pérdida electoral, las formas y los mecanismos para integrarse en el nuevo escenario; una polémica que aparentaba una intención por profundizar la democracia interna y por cambiar los estilos verticalistas y centralistas que prevalecían, lo que realmente no es así, como veremos a continuación.

En su Primer Congreso (julio de 1991), se evidenciaron contradicciones entre la dirección del partido, pero no se llegó a una ruptura. Este encuentro marcó pautas importantes en la redefinición del partido, pues se enfatizó en la importancia de hacer del FSLN un partido económicamente fuerte, que le permitiera mantener un lugar preponderante en el esquema de correlación de fuerzas políticas nacionales. Fue algo más que sólo una propuesta. Innumerables empresas y propiedades se comenzaron a constituir, bajo diferentes figuras legales, como de su patrimonio. En los diferentes medios de comunicación se comenzó a señalar y a denunciar a empresas que aparecían como propiedad de algunos militantes y dirigentes del FSLN, pero sin que éste las reconocieron como de su propiedad.

Todo su proceso de negociación con el gobierno lo justifica bajo la bandera de la defensa de los principales cambios socio-políticos e institucionales (reestructuración y democratización de la propiedad, avances constitucionales, no retorno del somocismo, etcétera) del sistema creado en la década de los 80, lo cual es considerado por el FSLN como parte de una estrategia de defensa de un proyecto social alternativo a largo plazo.

De esta forma, se siguen integrando nuevos elementos a la crítica, desde distintos sectores de la sociedad, pues ligan al

FSLN a la así llamada *piñata sandinista*, como parte de un mismo "bolsón" de propiedades usurpadas. Es decir, sin hacer diferencia entre las propiedades y viviendas otorgadas durante la transición a los miembros, militantes y a otros sectores, conforme las leyes 85 y 86, y los bienes adquiridos de manera ilegal y sin transparencia. Lo cierto es que el Frente Sandinista no ha aclarado, hasta el momento, sobre este controversial asunto de la propiedad, pero a lo largo del período ha venido defendiendo a ésta como asunto de primer orden.

En 1992, un llamado Grupo de Centro, presentó al gobierno y al FSLN, el documento "Desde el sandinismo, propuesta para un Proyecto Nacional", donde se enfatizaba sobre un proyecto nacional de consenso. Cuestionaba a la dirigencia del FSLN, por el divorcio entre su discurso de concertación y una práctica de huelgas y protestas sindicales a menudo violentas, ante las cuales el gobierno recurrió a la represión policial y al incumplimiento de los acuerdos de la Concertación. "Hay que encauzar el debate con espíritu unitario y constructivo. Están utilizando métodos destructivos para discutir",¹³ censuraba su secretario general.

Dos elementos vinieron a cambiar el discurso del FSLN en 1993. Por una parte, las expresiones organizativas del movimiento popular que le son afines, vieron reducida notablemente su capacidad de movilización y, por la otra, su principal interlocutor, el gobierno, se encuentra casi totalmente aislado del resto del sistema político, lo que pone al FSLN en una situación muy difícil dentro de la correlación de fuerzas políticas. Esto hace que dicho partido busque procesos de negociación con otros partidos de la UNO, así como con el mismo gobierno, y se distancie aún más de la base social que le permitió quedar como segunda fuerza electoral en 1990.

En 1994, las divisiones internas se evidenciaron y produjeron la división semi oficial del FSLN, al hacerse pública la formación de la Izquierda Democrática y el Movimiento de Renovación Sandinista. La primera (corriente mayoritaria del

13. *Barricada* 22 de agosto 1992.

FSLN) no contó con el suficiente poder para hacer valer sus intereses en la Asamblea Nacional, pero controló desde el principio a un partido desgastado en términos de influencia. Además, los renovadores nacieron casi sin ninguna base social, pero con amplio apoyo entre la intelectualidad de izquierda.

En la Sesión Extraordinaria del Congreso—en Mayo del 94—quedaron definidas las dos corrientes en el interior del partido y apareció como única diferencia visible, la pugna por la candidatura presidencial en las próximas elecciones del 96.

IMPLICACIONES SOCIALES DE LAS POLÍTICAS PARA LOS SECTORES POPULARES: CONTRACCIÓN DEL SALARIO, DESEMPLEO Y AUMENTO DE LA POBREZA

Contracción del salario

Una de las intenciones importantes del programa de estabilización, era la de reducir los salarios reales en el sector público, lo cual se logró a costa de la mayoría de los trabajadores y se reflejó en las huelgas de los trabajadores de la salud y educación por mayores salarios. En los cálculos oficiales sobre salario real, se muestra una aparente recuperación de los salarios reales promedios de la economía, en un período, aunque luego se volvieron a disminuir.

En dichos cálculos no se incluyó el efecto sobre los ingresos reales de los trabajadores y la eliminación de los beneficios otorgados por el gobierno de los sandinistas, como el transporte, los comedores, los centros infantiles y los llamados AFA (azúcar, frijol y arroz), paquetes quincenales y mensuales con esos alimentos.

Además, el proceso de reconversión ocupacional permitió crear una ilusión estadística, al reducir el peso relativo de los

salarios inferiores, por ser los trabajadores ubicados en este *status* salarial quienes mayoritariamente se acogieron a este proceso. Pero también influyó el hecho de que el sector privado sí, ha revalorizado los salarios reales. En 1992, el salario mínimo para el sector público era de 46 dólares.

En el caso del gobierno central, en 1993 y 1994, los salarios, calculados en dólares al tipo de cambio vigente, se redujeron un 8% y un 9% respecto al valor de la canasta de alimentos. Se estima que el salario medio en el gobierno central es aproximadamente el 60% de su valor en 1980.¹⁴

Con el gobierno de Violeta Chamorro las diferencias salariales aumentaron mucho más entre la gran mayoría de los trabajadores. Desigualdades mucho mayores hubo en relación a los profesionales de alta calificación y cuadros del gobierno, siendo aún más notoria entre los trabajadores y profesionales del sector privado.

Después de cuatro años de gobierno, finalmente, se consiguió reducir los salarios en el gobierno central. El impacto de las políticas de ajuste se dejó sentir en el deterioro del poder de compra de los salarios de los trabajadores.

Desempleo

Por las políticas de estabilización que planteaba la disminución del gasto público, se produjo una drástica reducción

14. Al respecto señala Evans, Trevor lo siguiente: "La estimación es en base al cambio en los gastos de remuneración del gobierno central como por ciento del PIB, tomando en cuenta la reducción en el PIB (20%), y la expansión en el número de empleados (también 20%). Un segundo modo de estimar el cambio en el salario real en el curso de este período sería en términos de dólares, lo que da un resultado similar: sorprendentemente, el valor del salario medio en el gobierno central en 1980 y en 1993 es casi igual en términos de dólares corrientes (unos \$130.0, pero se tiene que tomar en cuenta el hecho que, en el curso del período, el dólar perdió aproximadamente 50% de su valor, medido en términos de los precios al consumidor en los Estados Unidos." Evans, Trevor. *La Transformación Neoliberal del Sector Público*, Managua Nicaragua, CRIES, 1995, pp 221.

laboral en casi todas las instituciones, ministerios y empresas del Estado.

El empleo en el sector estatal fue afectado por varias medidas políticas. El despido indirecto y masivo de miles de trabajadores del gobierno anterior, aglutinados en las centrales y sindicatos sandinistas o trabajadores que en general se identificaban con los sandinistas.

Para finales de 1990, la Unión Nacional de Empleados (UNE) estimaba que alrededor de 3,200 trabajadores del sector público se encontraban sin trabajo, afectados por las medidas de ajuste. Pero la reducción no terminaba aquí. En febrero de 1991 se anunció una nueva reducción del gasto público vía el despido, en el gobierno central, en un 15%. De 66,837 trabajadores del gobierno central en 1989, se llegó a 60,273 en 1991.¹⁵

Los despidos generaron serios conflictos entre el gobierno y los trabajadores de los sindicatos sandinistas, lo cual fue una de las causas de la primera huelga de 1990. En la segunda huelga general en ese mismo año, los trabajadores reafirmaron con el gobierno el compromiso de garantizar la estabilidad laboral y el respeto a la Ley de Servicio Civil. Para garantizarlo, se estableció una Comisión que reglamentaría dicha ley, pero no funcionó; lo que no implicó que el gobierno abandonara su política de reducción del empleo. Pero consideró la búsqueda de formas que paliaran los efectos de las medidas. Así, impulsó el programa de retiro voluntario, conocido como el Programa de Conversión Ocupacional¹⁶ con cuatro opciones para los trabajadores del gobierno, en un intento de garantizar sus políticas en un clima de relativa tranquilidad.

Los trabajadores se acogieron al Programa, fundamentalmente presionados por los bajos salarios, por las presiones políticas, sobre todo, aquellos identificados con el gobierno

15. Evans Trevor, *Idem*, pp. 226 y 227.

16. Para ampliar más el tema véase el texto de Trevor Evans (ed) en: *La Transformación Neoliberal del Sector Público*, Latino editores, p.p 226 Managua 1995.

anterior y por las exitosas campañas de publicidad que les prometían un futuro de desarrollo y despegue económico.

De marzo de 1991 a marzo de 1992 se acogieron al programa de conversión ocupacional aproximadamente 22,561 trabajadores—los que recibieron un total de 60 millones de córdobas en compensación— de las siguientes instancias: 10,234 del gobierno central. De ellos, en orden de importancia, se encontraban 3,000 del Ministerio de Salud, de los cuales la mitad era personal médico, y 2,000 del Ministerio de Educación, la mitad de ellos maestros. Siguieron en orden los trabajadores del Ministerio de Finanzas, Agricultura y Ganadería.

Para 1993, la reducción era aún mayor, estimándose en 57,012 trabajadores en el gobierno central, en relación a 1991.

En las fuerzas armadas el impacto fue aún mayor. De 100,000 militares activos en el 89, se pasó a 20,000 en el 92; y se redujo a casi 15 mil miembros para finales del 94.¹⁷

Cabe señalar, que los desmovilizados no han logrado incorporarse a la vida civil por la falta de alternativas socioeconómicas, las cuales, les fueron ofrecidas por el gobierno. En el resto de sectores, según datos del Centro de Estudios de Asesoría Legal (CEAL), el porcentaje aproximado de afectados —según rama ocupacional— indica lo siguiente:

Sector Estatal	%
Sector de servicios públicos	30.7%
Sector industria	12.0%
Sector agrícola	11.0%
Sector comercio	7.0%

Fuente: Investigación sobre la Concertación y el Movimiento Sindical Revolucionario (1990-1992). Roland Membreño. Centro de Estudios de Asesoría Legal. Managua, Nicaragua. Diciembre de 1992.

17. Cabe señalar que la cifra de 100,000 efectivos militares integraba a los jóvenes del servicio militar obligatorio y oficiales activos. Datos de la Oficina Nacional de Retiro Activo del ejército, Managua, octubre 1994.

Los datos del Ministerio del Trabajo, se refieren a Nicaragua como el país que tiene la tasa de desempleo más alta de Centroamérica. Con una población de 4 millones 401 mil habitantes, en Nicaragua la PEA es de 1 millón 543 mil personas para una población ocupada de 1 millón 181 mil 200 personas; un desempleo abierto del 23.5%.¹⁸

El sector informal, que generalmente sirve de colchón al desempleo, ha ido adquiriendo nuevas manifestaciones lo que hace pensar que pronto llegará a su límite como alternativa, "ya que muchas personas... recurren a vender su fuerza de trabajo aún dentro del mismo sector informal".¹⁹

Desarrollo de la pobreza en el periodo 85-94

No cabe duda que la aplicación de las políticas de estabilización y ajuste estructural tiene efectos directos e inmediatos, en detrimento de los niveles de vida y como consecuencia el aumento de la pobreza en los sectores populares.

Según un estudio de la pobreza, publicado por el PNUD, el 74.83% de la población nicaragüense se encuentra ubicada en condiciones de pobreza.²⁰ Más del 50% de los hogares sufren situaciones de indigencia. Los mayores niveles de ésta se encuentran en grupos de jóvenes menores de los 19 años. 48% de las familias no pueden cubrir la canasta básica. El 65% de las familias urbanas se encuentran en niveles de pobreza.

18. Entrevista con la Directora de la Oficina de Empleos del Ministerio del Trabajo. Managua, Marzo 1995.

19. Véase, FIDEG, *El Observador Económico*, #8, agosto de 1992 p. 22. Managua, Nicaragua.

20. Véase, Estudio de la Pobreza en Nicaragua, Marzo-Junio de 1993 (Ministerio de Acción Social-PNUD-UNICEF) Managua, 1993.

IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DE ESTABILIZACIÓN Y AJUSTE EN LAS ORGANIZACIONES POPULARES

Es desuponer que estas políticas afectaron a las organizaciones populares del país de manera brusca. En el proceso de su aplicación el gobierno estimuló el crecimiento de los sindicatos no sandinistas, sobre todo en los dos primeros años de su gestión.

Se definen dos bloques de sindicatos que responden a diferentes afiliaciones políticas: el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) de filiación sandinista y el Congreso Permanente de los Trabajadores (CPT), que integra en su mayoría a los sindicatos no sandinistas. Además de estas agrupaciones existe la Central de trabajadores de Nicaragua (CTN).

Aún tomando en cuenta a estos nuevos sindicatos en el país, se puede señalar que el movimiento sindical tiene su mayor peso en el sector público, y un amplio apoyo lo tienen los sindicatos sandinistas. De 790 sindicatos registrados a nivel nacional, el 62% se encontraba en el sector público, y de los 51,859 afiliados registrados, el 66% pertenece al Estado. De los 486 sindicatos registrados en el sector público, el 53% corresponde al FNT, el 24% al CPT y 13% a la CTN.²¹

Sin embargo, la disminución del número de empleados públicos y los afectados por la privatización, redujo el número de afiliados y mermó la capacidad de movilización de las organizaciones populares.

Los miembros de la CST, señalaban que en sus federaciones el empleo había disminuido en un 50% al pasar de 89,071 trabajadores en 1989 a 41,012 en 1992.²²

La contracción del empleo en el Estado y la privatización implicó que desaparecieran las actividades que como sindicato

21. Véase Trevor Evans en su artículo, "La Transformación Neoliberal del sector Público", p.197, Latino Editores, 1995.

22. Boletín Centro de Estudios de Asuntos Laborales (CEAL), p.2, Managua, Febrero 1992.

realizaba la asociación de empleados del sector público UNE y del sector privado, durante el sandinismo, como la movilización a los frentes de guerra, en los barrios marginados del país, en los centros de trabajo y la participación en los Consejos de Dirección e instancias superiores, etcétera. Asimismo, la suspensión de la retención en la planilla fiscal de la cotización sindical, afectó la principal fuente de financiamiento de los sindicatos. El movimiento sindical asumió una posición defensiva ante las políticas gubernamentales. La dinámica de movilización sindical y popular fuera de las dos grandes huelgas nacionales realizadas en 1990, fue descendente a medida que se implementaban éstas. El impacto afectó a los sindicatos sandinistas, pero aún más a los sindicatos no sandinistas, ya que al surgir como un movimiento confrontativo a éstos, no les dio tiempo de fortalecer sus organizaciones.²³

En la actualidad, los trabajadores se movilizan fundamentalmente alrededor de:

- la defensa del empleo
- la defensa del salario
- y la lucha por la reorganización y legalización de los sindicatos de todas las tendencias.

CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES POPULARES

La nueva política económica, ha tenido repercusiones considerables en la actividad de las organizaciones populares.

Las organizaciones populares afines al sandinismo, en su mayoría, se plantearon inicialmente como objetivo de lucha,

23. Entrevista con Gloria María Hernández, Secretaria General del sindicato del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de orientación sandinista, 11 de Febrero de 1995.

preservar los beneficios sociales y económicos alcanzados durante el sandinismo. Esta tendencia varió a lo largo del proceso, por la crisis generada tras la aplicación de las políticas de estabilización y ajuste.

El movimiento sindical y las organizaciones populares en su conjunto, carecieron de una estrategia clara, preservando una lucha defensiva; salvo en las huelgas del primer año, en las que, por la circunstancia de iniciarse el nuevo gobierno, y por el desarrollo de huelgas en áreas sensibles de los servicios estatales y la economía del país—como las comunicaciones, las aduanas, el aeropuerto, etcétera— los trabajadores obtuvieron logros significativos. La falta de un espacio de confluencia intersectorial y de negociación con el gobierno colocó a los trabajadores en una situación de mayor desventaja frente a éste.

La movilización popular

La estabilización no vino sólo con el gobierno conservador, ya en 1988, el régimen sandinista había impulsado un programa de estabilización que concluyó en enero del 89. En aquel entonces, el programa fue implementado y fuera del asombro de la misma militancia y una pequeña manifestación de la Confederación General del Trabajo (CGT) que fue reprimida por los antimotines, el programa fue implantado sin mayores turbulencias. Este comportamiento sólo se explica por el hecho de que la mayoría de las organizaciones populares estaban controladas o eran afines al partido en el poder.

Bajo el nuevo gobierno la primera protesta (mayo 90), realizada en menos de dos semanas después de la toma de posesión del nuevo gobierno, paralizó totalmente el funcionamiento del Estado y los servicios brindados por las empresas del sector público (transporte, energía, comunicaciones). Fue convocada por el sindicato de los empleados públicos de orientación sandinista (UNE), en demanda por un reajuste salarial y

en protesta por la suspensión de la Ley de Servicio Civil y por la estabilidad del empleo.

La segunda protesta se originó por la acumulación del deterioro del nivel de vida de la población, vinculada a la política económica, y dio fin a las medidas gubernamentales. Estos decretos contemplaron la revisión y la devolución a sus antiguos dueños de las propiedades confiscadas y expropiadas durante el sandinismo, y se procedería al arriendo inmediato de las tierras en manos del Estado. A esto se sumaron las reivindicaciones de los trabajadores del sector estatal, los trabajadores del campo, la industria textil y de la construcción.

La solución de ambas huelgas fue negociada entre comisiones encabezadas por el Secretario General del FSLN, Daniel Ortega, y por el Ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo. La segunda huelga dio como resultado la convocatoria a una concertación nacional, de la que ya se hizo referencia.

En este contexto, era muy perceptible un alto grado de movilización social, expresado en huelgas parciales y totales de diferentes gremios y empresas, así como en protestas de pobladores en los diferentes barrios y ciudades del país. Sin embargo, esta capacidad de movilización se ha visto debilitada como producto del impacto del programa de estabilización y ajuste. Así por ejemplo, datos proporcionados por el Ministerio del Trabajo de mayo de 1990 para abril de 1995, se sometieron a la consideración de esta institución 329 huelgas, en las cuales estuvieron involucrados 82,802 trabajadores. Según, esta fuente el cuadro que a continuación se señala, muestra que la conflictividad y su incidencia en la economía nacional ha ido disminuyendo.²⁴

24. Fuente documento inédito del Ministerio del Trabajo. Junio de 1995.

**PROMEDIO DE HUELGAS REGISTRADAS
PORCENTUALMENTE ENTRE MARZO
Y ABRIL DE 1995²⁵**

Según Rama de Actividad	1990	1991	1992	1993	1994	1995	Total	%
Agropecuaria	8	5	14	9	-	-	36	11
Industrial	18	36	19	9	4	-	86	26.1
Construcción	3	5	1	4	2	-	15	4.6
Servicios	23	86	50	21	4	3	187	56.8
Transporte	3	1	1	1	-	-	6	1.5

Otra causa fue la falta de respuesta y representación de las reivindicaciones por parte del sistema político, lo cual ha terminado por provocar cansancio y desintegración social en el movimiento popular.

No se cuenta con datos cuantificados ni sistematizados de los conflictos ocurridos en los últimos cuatro años. El Centro de Estudios y Análisis Socio Laborales (CEAL) mostraba, sin embargo, en sus boletines, hasta 1993, inventarios sobre los conflictos políticos sucedidos entre huelgas, protestas, paros, tomas, denuncias, etc, indicando que casi siempre los conflictos se ubicaban en las cabeceras departamentales: Managua, Matagalpa y Jinotega.

La naturaleza de los conflictos, en su mayoría, se produce por problemas de tierras y desalojos. Los sectores populares continuaron en sus protestas, pero no llegaron a presentar la fuerza de las primeras huelgas, con excepción de la del transporte en septiembre de 1993. No obstante estas protestas, el gobierno ha seguido adelante en la ejecución de su programa económico, utilizando la táctica de negociar, firmar y no cumplir, en tanto que los sectores populares van sufriendo un desgaste acelerado y su capacidad de presión va perdiendo fuerza. Su táctica de presión en las calles, se convirtió en el principal método de lucha, pero de forma aislada, a nivel de

25. Ministerio del Trabajo. Dirección General de Empleo y Salarios. Marzo-abril 1995. Managua, Nicaragua.

cada sector y dentro de éste en cada centro de trabajo. Es decir, presionando siempre por sector y por empresa.

Es así como el movimiento popular ha perdido la capacidad de influir en las luchas que tienen implicaciones en políticas de carácter nacional. No es casual que fuera de las declaraciones públicas, no existió ninguna resistencia a la firma del ESAF entre el gobierno y el FMI.

Dinámica organizativa

Después de la derrota electoral del 90, las organizaciones populares existentes (CST, ATC, Movimiento Comunal, UNAG etc.) en la década del 80 –señaladas por Serra en este libro– se mantienen. Sólo cambian, en algunos casos, las formas organizativas y su capacidad de influencia en la sociedad.

Por ejemplo, lo que antes eran los Comités de Defensa Sandinista (CDS), se convirtió en el Movimiento Comunal.²⁶ Pasó de ser una estructura muy orgánica e inflexible a constituirse en un movimiento que estructura a los habitantes de los barrios alrededor de la lucha por problemas muy concretos, como seguridad ciudadana, salud, defensa de la propiedad, con estructuras organizativas muy flexibles.

La forma en que los sindicatos sandinistas se reagrupaban y funcionaban, cambió. Las federaciones, asociaciones y uniones sectoriales, que existían y participaban en las actividades de las OPS (Organizaciones Populares Sandinistas) con una conciencia de identidad gremial, se constituyeron en una expresión más global en el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), con una participación más coyuntural.

La CST, que antes aglutinaba a todos los sindicatos ligados al sandinismo, pasó a responsabilizarse únicamente del trabajo con los sindicatos industriales, siempre como miembro del FNT. La Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), que organiza-

26. Proceso que desde 1987, se venía perfilando.

ba a obreros agrícolas y campesinos, dirige su atención, fundamentalmente, hacia los trabajadores del Area Propiedad de los Trabajadores (APT), descuidando su membrecía fuera de ésta y a otros sectores de trabajadores.

La organización de las mujeres que principalmente se vinculaba a la Asociación de Mujeres Luisa Amanda Espinoza (AMNLAE), muestra un repunte en términos del surgimiento de una gran cantidad de nuevos grupos a nivel local, y en algunos casos nacional, vinculadas a temas muy concretos como la violencia contra la mujer y la atención de sus problemas de salud, o temas muy generales como el de género, etc.

Asimismo, organizaciones sindicales como la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN), Comité de Acción y Unificación Sindical (CAUS) y la Confederación de Unificación Sindical (CUS), que en la década anterior no habían logrado un desarrollo organizativo y de representación importante, aparecen con cierta presencia en el escenario político, aunque con una representatividad social aún muy marginal.

Habría que señalar, que la existencia e influencia de las organizaciones sandinistas en la sociedad es mucho mayor en relación a otras organizaciones, incluso más viejas, que éstas y otras que aparecieron luego del cambio de gobierno. Recientemente surgieron entre ellos, por ejemplo, otros gremios tales como la Juntas Comunitarias (JCOP) del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que también disponen de gran influencia.

Representatividad de las Organizaciones Populares

Ninguna de las organizaciones sandinistas suministra datos actualizados acerca de su respectiva afiliación formal. Es de suponer, que por los planes de reducción del Estado y la privatización, la afiliación formal ha disminuido en relación a los años 80. Así, por ejemplo, la CST refería una disminución de

alrededor del 50%; lo mismo ha ocurrido en el caso de los sindicatos de empleados públicos (UNE). La Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) sigue manteniendo la cifra oficial de 120,000 afiliados; sin embargo, uno de sus miembros refirió que la asociación formal estaba por los 90,000 miembros. Finalmente, el hecho de que aún continúa la aplicación de los planes de reducción, hacen aún más difícil actualizar esta información.

En los sindicatos no sandinistas, agrupados en el CPT, hubo algunos repuntes de la afiliación, dentro del cuadro minoritario que presentaban hasta finales del 80 –y que se reactivó con el apoyo del gobierno en sus inicios– pero empiezan a desvanecerse, en un retroceso lento y gradual, por iguales razones.²⁷

En la práctica, la afiliación real,²⁸ es considerablemente menor a las que expresan los dirigentes de las diferentes organizaciones. Diversas razones explican lo anterior. Una de ellas es que con la pérdida del gobierno, la posibilidad que tenían los sindicatos sandinistas, a través del Estado y sus empresas de control automático –como bien es indicado en el trabajo de Serra– se acabó. Ya no se puede descontar la cotización sindical del salario ni pueden incluirse de forma automática en las empresas o cooperativas como miembros de la CST o la ATC, sino que debe ser asumido por la organización como una actividad más, la que en muchos casos, les es imposible. Así por ejemplo, los dirigentes sindicales invitan al trabajador a participar y establecen una relación directa y personal para integrarlos en la organización. Algunos dirigentes sindicales,²⁹ refieren, al respecto que integrar a un trabajador implica que el trabajador esté dispuesto a dar mensualmente a una parte de su salario (cuota sindical) que representa mucho en términos económicos

27. Documentos inéditos de la Central Sandinista de Trabajadores, Managua, 1993.

28. Afiliación real como lo refiere Luis Serra en su trabajo que aparece en este libro: "participación activa en las tareas de las organizaciones populares con una conciencia gremial".

29. Entrevista con Gloria María Hernández.

en las condiciones actuales. Y este trabajo, ahora, hay que realizarlo y mantenerlo.

La desmotivación e incertidumbre que se generó sobre todo entre los miembros de las organizaciones con la llamada "piñata sandinista",³⁰ los hizo perder confianza y alejó a muchos de ellos. Estas situaciones de poca transparencia sobre las propiedades y empresas adquiridas por los dirigentes sindicales a título de las asociaciones, generaron aún más desconfianza en la gente. Los miembros de las agrupaciones sandinistas aparecieron involucrados, de manera general, como participantes de esta llamada "piñata", calificativo que los ubica como usurpadores de los bienes del Estado.

Otro elemento que influye notablemente en la afiliación, se presenta cuando al inicio de la privatización fueron denunciados muchos de los dirigentes nacionales que participaban como representantes de los trabajadores en las negociaciones, de mediatizar las posiciones de éstos. Y en innumerables ocasiones los trabajadores y dirigentes de base a través de los medios de comunicación evidencian estas contradicciones.

Por último, la crisis económica obstaculizó la integración real, por las pocas posibilidades de acceso a recursos que respaldaran el impulso de las actividades de las organizaciones populares sandinistas.

En la actualidad, se aprecia un esfuerzo de los dirigentes de base de estas organizaciones por representar real y efectivamente los intereses de su gremio o sector, sin distingos políticos, contrario a lo practicado en la década anterior. Ya no como correas de transmisión. Esto es quizás uno de los avances más

30. No hay una definición precisa de este término. Sin embargo, de manera general, ha sido utilizado por los sectores de oposición al FSLN, en el que expresan como una crítica al proceso mediante el cual se transfieren las propiedades en manos del Estado, ya sea que estuvieran legalizadas o que el Estado hubiera actuado con ánimo de dueño a quienes estuvieran usufructuando el bien. Se considera pinata los casos de abuso, por ejemplo, cuando una persona se quedó con varias propiedades o no siendo sujeta a las leyes de Reforma Agraria recibiera tierras.

significativos del desarrollo de estas organizaciones, al final del período.

El ingreso se ha abierto para todos los individuos que pertenecen al sector social que corresponde a cada organización. Ahora no se rechaza a quienes externan críticas al gobierno, lo que es lógico, y son menos excluyentes con la gente que pertenece a otros partidos. El motivo principal de los trabajadores de las empresas y del Estado para afiliarse lo es, en primer lugar, la lucha por la estabilidad laboral y por mejorar sus salarios. Así, para los campesinos la lucha por defender sus propiedades y el aumento y "democratización del crédito"; y para los habitantes de los barrios populares la permanente lucha por la legalización de sus propiedades, adquiridas durante los años revolucionarios.

De esta forma, la participación y movilización que se expresaba anteriormente en la asistencia a asambleas, movilizaciones, trabajos voluntarios no remunerados, campañas de salud, etcétera, desapareció de los sindicatos y de las organizaciones populares en general. La gente participa en actividades muy concretas vinculadas a los problemas muy específicos que les afecta directamente como gremio o sector.³¹

En esta situación hay que destacar, que dos fenómenos estarían incidiendo. Por una parte, existe un cuestionamiento a la dirigencia y en muchos casos al proyecto mismo por el cual la gente se organizó anteriormente.³² No sólo impulsó a la gente a luchar por el derrocamiento de la dictadura somocista, sino también la posibilidad de lograr mejores niveles de vida. A lo largo de la década esto no sucedió y por el contrario, al inicio de los 90, con las políticas impulsadas por el nuevo gobierno, el rápido deterioro en el que se vieron sujetos los trabajadores, impacto aún más. La pérdida de confianza generada por las

31. Entrevista con dirigentes sindicales, Septiembre 1994, Managua.

32. Encuestas realizadas indican que la gente se organizó durante la década de los 80 con el gobierno y partido sandinista por la esperanza de lograr niveles de vida mas equitativos. Lo que ha cambiado actualmente.

innumerables actividades y movilizaciones político-gremiales, sin lograr nada a cambio, ha provocado una desmotivación creciente en la participación. Como ya señalamos, no se lograron a favor de los trabajadores reivindicaciones políticas importantes. En esto han influido mucho los procesos de negociaciones y pactos políticos en los que se ha involucrado el FSLN. Las luchas de las organizaciones populares siempre han estado sujetas a las negociaciones del FSLN.

Por otra parte, el hecho de que la lógica del ajuste impuso una dinámica, en la que la población prioriza la solución de sus problemas individuales y la atención a su espacio privado, se inhibe evidentemente el interés social de participación y la movilización popular.

En los barrios, las movilizaciones en torno a actividades como las reuniones por cuadra, jornadas de limpieza, etcétera, también han desaparecido. La presencia del Movimiento Comunales, fundamentalmente, alrededor de los problemas de la propiedad.

Contrario a lo anterior, el surgimiento y desarrollo de las JCOP –movimiento del PLC– ha sustituido los niveles de participación y movilización, en términos generales, de los habitantes, porque se vinculan a partir de actividades y problemas de la comunidad, como la construcción de calles, jornadas de salud, etcétera. Aquí la gente plantea que ahora no les interesa si es una actividad de un partido u otro, siempre que se beneficie la comunidad participan y se movilizan. Pero, al igual que la experiencia de los CDS, es muy cuestionable el concepto de participación y movilización vinculado a este movimiento, ya que la dirigencia de las JCOP organizan a la gente en función de resaltar la figura del Alcalde de Managua, Arnoldo Alemán y su partido, el PLC, partiendo de las necesidades de la gente.

El hecho de que en el movimiento de mujeres se esté produciendo un notable aumento del número de organizaciones, es indicativo de que AMNLAE, de afiliación sandinista, no representa a todo el sector y su nivel de influencia prácticamente ha desaparecido. En este sector, no es posible considerar una reducción en los niveles de participación y movilización; muy

por el contrario, en este caso lo que se aprecia es un incremento en su actividad, esta vez con mucha autonomía y capacidad de propuesta, pero aún de forma muy desarticulada. De tal forma, que en este período (1990-1994) han logrado una mayor presencia en los medios de comunicación y repercutir en los espacios institucionales del sistema político y del gobierno.

En 1992, se desarrolló una lucha alrededor de la creación de instancias que protegieran a las mujeres de la violencia social y familiar, lo cual se concretó en la fundación de las Comisarías de la Mujer en distintos departamentos del país, adscritas a la Policía Nacional.

La Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), continúa siendo reconocida como representante legítima del movimiento campesino nacional. Sin embargo, esta organización en la práctica enfatiza más su atención a los medianos y grandes productores. Lo que ha significado la desatención para los campesinos pobres. En un seminario-taller³³ realizado en una zona del norte del país, los campesinos pobres resaltaban la importancia de la presencia de la UNAG como expresión del FSLN en el campo, reconociendo que fue la única organización que durante la revolución se preocupó de los problemas de insumos, crédito, herramientas, etcétera, de los campesinos y que ahora no tiene presencia en casi ningún departamento. Esto, en parte, se explica por las políticas de alianza que también ha prevalecido en esta organización.

En el caso de la ATC y la CST, todo parece indicar que el esfuerzo que les ha implicado la organización del Área Propiedad de los Trabajadores (APT) los ha obligado a descuidar el trabajo con el resto de sus afiliados, lo que ha afectado negativamente sus niveles de afiliación, porque un amplio sector de trabajadores del campo quedaron fuera del APT y sin organización sindical que los representara.

33. Seminario taller realizado en Chinandega, al norte del país impulsado por la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, en julio de 1994.

Las organizaciones populares sandinistas, sus dirigentes y bases

Los dirigentes de base de las organizaciones sandinistas siguen siendo elegidos o revocados de forma directa por los miembros de estas organizaciones en asambleas y de forma pública, en la mayoría de los casos. Sigue prevaleciendo la confianza del colectivo de base, bajo los criterios fundamentales de honestidad y de lucha por los intereses del gremio o sector. La gente enfatiza más en que sea un dirigente de ellos que del partido, el FSLN, el que los represente.

Los activistas de los barrios y en el resto de las organizaciones populares, de los empleados públicos, de los sindicatos, de los trabajadores del campo, aún asumen, de forma voluntaria y gratuita su cargo. Con mucha discreción se integran al trabajo político de su organización, por el temor a perder sus puestos de trabajo en las empresas o en las instituciones; y en los barrios no lo hacen por el poco tiempo con que cuentan para realizar las actividades de su organización.

Los niveles de interrelación entre los dirigentes de base y sus miembros son mejores. Hay una exigencia muy fuerte entre éstos por lograr que los dirigentes trabajen alrededor de los problemas del sector social. El uso de los murales y el contacto personal, parece ser el mecanismo más directo para transmitir la información sobre las actividades.

En cambio, los dirigentes intermedios y superiores siguen siendo nombrados por las juntas directivas nacionales de las organizaciones populares o por los dirigentes del FSLN. En casi todas estas corporaciones están a la cabeza los mismos dirigentes políticos nombrados en la década de los 80. Este método establece una mayor dependencia y responde en primer lugar a sus superiores, antes que a sus bases.

La relación con las bases se establece a través de las esporádicas asambleas y reuniones, en donde los dirigentes intermedios y superiores mantienen el mismo esquema de imposición de las directrices del partido a las organizaciones de

base. Si antes hubo algunas posibilidades de críticas o revisión en las actividades organizativas en que los dirigentes superiores rendían cuentas ante las bases, del uso de los fondos de las organizaciones, o bien alguna autoevaluación del desempeño de los cargos, ahora han desaparecido.

Asimismo, las organizaciones populares se han convertido en instancias que se presentan como negociadores frente al gobierno u otros sectores. Por ejemplo, en reiteradas ocasiones los dirigentes superiores aparecen en situaciones de conflicto, negociando con el gobierno y mediatizando las posiciones de los trabajadores o de la población.

Los dirigentes de base, frente al desencanto de su partido y enfrentados a las políticas neoliberales, piensan más en términos de sus estrategias de sobrevivencia. Esto los ha hecho mantener una posición mucho más crítica frente a los dirigentes superiores. Existe una relativa autonomía entre las bases y los dirigentes superiores, en la medida en que ahora cuestionan y exigen una relación, con éstos, más transparente.

Según un ex-dirigente de una empresa de Managua, los directivos de la CST son "dueños de las empresas de los trabajadores y se olvidan de los problemas de los obreros". Este cuestionamiento y el reclamo de transparencia a los dirigentes superiores, se plantea con fuerza a lo largo del periodo, en las diferentes organizaciones populares sandinistas. La secretaria general de UNE en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por ejemplo, cuestionaba a sus dirigentes de forma pública, señalando que: "Las grandes negociaciones del FNT en ningún momento han dado respuesta a los trabajadores estatales; (y que) de esos acuerdos nunca ha salido favorecido el sector público presupuestado."

Pero lo más importante en este proceso, ha sido que los dirigentes superiores se han distanciado de sus bases y, peor aún, en los procesos de conflicto serios las han dejado solas, más cuando se han sentido cuestionados. Por diversos motivos, estas manifestaciones de descontento, por las formas de dirección establecidas, ha significado un desgaste progresivo, sumado a los otros factores señalados.

El poder de decisión sigue concentrado en los dirigentes superiores. El trabajo de las organizaciones populares ya no se planifica de acuerdo a líneas anuales ni existen procesos de evaluación. La capacidad de propuesta de los dirigentes de base, perdió aún más fuerza por el divorcio entre sus intereses y las posibilidades de incidencia real.

Las relaciones con el Estado

A pesar de que las organizaciones populares han sido capaces de expresar las reivindicaciones del sector social que representan, la mayor parte de éstas no han recibido una respuesta satisfactoria a causa de una desfavorable correlación de fuerzas para los sectores populares. Así, la capacidad de satisfacer los intereses de cada sector depende fundamentalmente de factores externos, en tanto está sujeta a las decisiones del Estado.

El papel de las organizaciones como instrumento de vinculación entre las bases y las máximas autoridades gubernamentales, a través de diversos canales de comunicación, desapareció. En su defecto, les han quedado los medios de comunicación colectiva (principalmente prensa, televisión y radio). El medio de comunicación directo entre las organizaciones populares y el Estado, se establece ahora a través de negociaciones y transacciones más globales, generalmente de carácter intersectorial, para las cuales muchas veces se requieren, previamente, fuertes movilizaciones callejeras.

Las instancias oficiales donde participaban en la discusión de políticas destinadas a su sector social o empresa, igualmente dejaron de existir. En 1995, el gobierno, a través de decretos, anunció la fundación de nuevas instancias de participación para la toma de decisiones estatales. Se creó una Junta Directiva del Instituto Nicaragüense de Seguridad y Bienestar Social (INSSBI), con representación del Movimiento Comunal y los trabajadores del sector público y privado. De igual manera, se integró la Comisión Agraria para atender los asuntos políticos

vinculados a este tema y la Comisión de Crédito, vinculada al Banco Nacional de Desarrollo (BANADES), que atendería los problemas crediticios de los pequeños productores. Estas comisiones, aparentemente, se encuentran en proceso de formal constitución, por lo cual aún es prematuro evaluar resultados.

No obstante, organizaciones como la UNAG, CST, ATC, las cuales participarían en las comisiones, no se pronunciaron, al menos de forma pública, sobre dichos espacios o instancias de intervención. Esto hace pensar que existe mucho escepticismo alrededor del funcionamiento de estas comisiones. La brusca aplicación de las políticas neoliberales, en las cuales han estado excluidos, incluso en los procesos de negociación las organizaciones y demás sectores populares, ha generado un ambiente de enfrentamiento y conflicto entre ellas y el Estado. La falta de cumplimiento del gobierno, de los acuerdos con los organismos, ha aumentado la brecha entre ambos.

Además, las experiencias de participación acumuladas por los trabajadores, que ya era un reto para los mismos, se ven ahora más limitadas, en términos de la gestión empresarial. El proceso de constitución del APT, significa no sólo el problema de la participación de los trabajadores, sino también enfrentar a un Estado que intenta beneficiar con su política económica al gran capital, el que incorpora segmentos importantes de empresarios con una visión mucho más moderna que la media de los empresarios nicaragüenses.

Alo anterior se suman los problemas –planteados por Serra en su capítulo– sobre la limitada formación técnico-profesional de muchos de los dirigentes de las organizaciones populares. Esto imposibilita aún más la debida gestión, participación y mejoramiento del bienestar material de los trabajadores, lo que ha conllevado a la venta de las acciones adquiridas de sus empresas.

En realidad, las políticas neoliberales impulsadas por el gobierno de la Presidenta Chamorro, no dieron lugar a espacios de participación política; sumado a ello el co-gobierno, marcó aún más los límites a las demandas de los sectores populares,

imponiéndose una relación defensiva, con consecuencias poco favorables para los sectores populares y el mismo Estado.

Las relaciones con el FSLN

El reconocimiento y respeto de la población en general y de la membrecía de las organizaciones populares, en particular hacia el FSLN, como el partido dirigente y representante de los intereses de los sectores populares, sufre deterioro a partir del 90.

Diversos elementos influyen para sostener este argumento. Uno de éstos que con más insistencia utilizó el resto de partidos para atacar el FSLN, fue el hecho de que muchos de los bienes quedaron en manos de un reducido grupo de dirigentes, a través de adquisiciones poco transparentes. Este hecho generó descontento en los sectores populares, aún más por los procedimientos utilizados y porque nunca se demostró lo contrario, ante las críticas de sus adversarios.

Para la población, estos hechos generaron contradicciones entre la visión ético-moral que se tenía del FSLN y sus actuaciones al final de su mandato; contradicciones que, poco a poco, se han ido convirtiendo en desconfianza y han marcado la tendencia a romper con el esquema de atención colectiva a los problemas de la comunidad, impulsados durante los 80. Es de destacar que el problema ético-moral en el caso nicaragüense, es especialmente relevante. Uno de los elementos centrales de la lucha del sandinismo, lo constituyó la crítica a la historia de los partidos políticos tradicionales, por la pobreza ético-moral de sus actuaciones en relación a los intereses populares.

Otro factor, es que la redefinición de la estrategia política del FSLN trasladó a los trabajadores del Estado, sectores populares, obreros y campesinos no incluidos en el Área Propiedad de los Trabajadores a un segundo lugar de prioridad. La alianza de obreros y campesinos, en cambio, se trasladó a la estrategia de pactos para ganar elecciones.

Pero, además, el FSLN ha venido definiendo su estrategia de desarrollo del país de tal forma, que importantes sectores no se ven reflejados como ejes de dicho planteamiento. Al respecto, Mónica Baltodano, una de las nuevas integrantes de la Dirección Nacional del FSLN, definía las nuevas alianzas así:

"...para nosotros la alianza más importante de cara al futuro, más allá del 96, es con los productores, y entre ellos, con los que recibieron tierras de la reforma agraria, con las cooperativas, con los desmovilizados del ejército, el Ministerio del Interior y la resistencia, con los trabajadores que son dueños de sus empresas. Esos son nuestros principales amigos."

Al parecer, el FSLN ya no levanta su estrategia de lucha política y de desarrollo sobre la base de una amplia movilización popular, dirigida a impulsarlas a participar en la solución de los problemas de cada sector social. Se pretende erigir sobre la base del poder económico que representan estos sectores. En esta definición de alianzas, evidentemente hay sectores que no se ven reflejados. Esto ha sido percibido por los sectores populares que ya no acuden a las convocatorias de sus organizaciones, lo que es más notorio en el caso del FSLN.

Un elemento más lo constituye el hecho de que los líderes del FSLN apoyaron políticamente al gobierno de Violeta Chamorro, con la justificación de que la alternativa podría ser un gobierno de tendencia más derechista. Este fue el principal argumento que justificó que sus críticas a la política económica fueran moderadas. Los diputados sandinistas respaldaron esto, votando en favor del programa de estabilización en el 91, con la sola excepción de un representante del sector sindical.

Y a lo largo del proceso este ha sido el comportamiento del FSLN, cuyas implicaciones han significado el cierre total al acceso del sistema político, mayor empobrecimiento económico y social. En suma, para un sector importante de la población, el FSLN ha dejado de ser una alternativa de solución a sus problemas.

CONCLUSIONES

En efecto, es correcto pensar que los elementos participativos del modelo liberal y socialista –como bien señalaba Serra en este libro– con los que contaban los sectores y organizaciones populares en la década de los 80, cambiaron con el nuevo gobierno.

A inicios del periodo (90-94), la participación de los sectores populares parecía darse en un espacio de luchas y confrontaciones en los cuales el objetivo más importante era el resguardar lo obtenido o recibido por el gobierno sandinista. Sin embargo, este espacio de participación, después de las dos huelgas que se dieron a inicio del nuevo gobierno, se fue estrechando cada vez más, hacia lo contrario: un lento y gradual proceso de desmovilización.

El partido sandinista, vanguardia de los trabajadores en su proceso de reacomodo en la nueva coyuntura política, priorizó otros sectores y políticas las cuales aún no están muy claras. Lo que sí se observa, muy claramente, es que los sectores y organizaciones populares, obreros y campesinos no representan el sujeto principal de su estrategia política. En los primeros meses del nuevo gobierno, la participación y movilización de los trabajadores y de los sectores populares estuvo muy vinculada a la necesidad que en ese momento, requería el partido derrotado de demostrar a sus adversarios la capacidad de movilizarse que tenían –los dirigentes sandinistas– en la búsqueda de cuotas importantes de poder. Ello significó en la práctica que el partido FSLN, perdió el arraigo que en términos de los sectores populares había logrado en años anteriores y la pérdida de hegemonía entre la mayoría de las organizaciones populares.

Por otra parte, el resto de los partidos políticos disponen de lazos sociales incipientes con los sectores y organizaciones populares lo que influye en las posibilidades de éstos de canalizar por esta vía intereses de las asociaciones populares.

En este período (90-94), el carácter representativo del sistema político ha promovido el acceso al gobierno de las

fuerzas adversas a la participación de los sectores populares. Y como señala Serra —en este libro— el carácter predominante de la participación popular continuó siendo el de una "movilización dirigida" por los sandinistas ubicados en las Organizaciones Populares Sandinistas. A lo largo de este proceso, la participación y la movilización dirigida, como se señala anteriormente, ha sido el resultado de los intereses políticos del partido sandinista, en dependencia de la coyuntura política. Y en efecto, los sectores populares en este vaivén de contradicciones e intereses del FSLN, en una coyuntura tan excluyente, han hecho eco del nuevo juego político. Así la participación de los sectores y organizaciones hacia las movilizaciones es cada vez más selectiva. Dejó de ser, masiva y significativa, por la ausencia de liderazgo en las organizaciones populares y el resquebrajamiento de éstas. De esta forma, impera un clima de "yoquepierdismo", desolación y angustia. Lo más difícil, es la actitud casi generalizada de muchos de estos sectores, de asumir problemáticas de carácter nacional como por ejemplo el desempleo, de manera muy particular sin tener opción de recurrir a las organizaciones populares que en la década de los 80 se movilizaban por ejemplo en la defensa, en las cruzadas nacionales de producción y educación. Así el incremento de actos delictivos y violentos aparece como el rasgo más predominante para los sectores populares en el sistema político y social.

Y el resto de los sectores políticos en el país, se enfrascan en la resolución de sus intereses particulares y eleccionarios.